

GRUPO 5: Políticas sociales, laborales y de seguridad social

Hacia una Política Económica - Social: Aspectos a considerar en la construcción colectiva de una política inclusiva

Hilda Maggi

Profesor Responsable. Asignatura: Taller de Práctica IV. Abordaje Comunitario. Carrera: Lic. en Trabajo Social. Facultad de Ingeniería y Ciencias Económica-Sociales. Universidad Nacional de San Luis

hmaggi@fices.unsl.edu.ar

Julieta Rodrigo

Auxiliar Docente. Asignatura: Taller de Práctica III: Abordaje Familiar. Carrera: Lic. en Trabajo Social. Facultad de Ingeniería y Ciencias Económica-Sociales. Universidad Nacional de San Luis

julieta.rodrido@gmail.com

“Cualquier persona que camine por las calles de nuestras ciudades tendrá, sin lugar a duda, una experiencia personal y directa de la marginación social de diferentes grupos sociales”.
Anónimo.

La globalización plantea un conjunto, pero del que no todos formamos parte, donde se advierte exclusiones estructurales y esto define cambios en los espacios y en las identidades de los sujetos.

“El modelo social imperante incentiva todos los aspectos de rivalidad y competencia, y genera una situación de “escasez” –en el sentido que le da Sartre al término en su *crítica de la razón dialéctica*,- de “exclusión recíproca”. Es decir, convierte a aquellos que deberían ser articulables y solidarios en contrarios y rivales” (Quiroga, A 2001).

Este mundo se caracteriza por la interdependencia de modo tal, que lo que sucede en cualquier lugar del planeta, repercute necesariamente en el resto.

Mientras que la Revolución Industrial significó un cambio de época, donde el trabajo a través del empleo, posibilitaba a los sujetos un marco de cierta seguridad con oportunidades para organizarse, prever y protegerse –a pesar de las luchas que implicó contra la explotación derivada-, “el estar empleado” proveía al sujeto de identidad. (Rivello, B. 2001).

Actualmente, asistimos a un corte de época, donde las transformaciones económicas, sociales y políticas, lejos de ser coyunturales, más bien son definitivas (Forrester, V. 1997).

La revolución científico tecnológica consolida un nuevo modelo productivo y de administración social y económica, sustentado en las tecnologías de avanzada (Argumedo, A. 1996), y forma parte de los nuevos escenarios que América Latina debe enfrentar.

A ello, cabe agregar, los cambios políticos ocurridos en el mundo, la generalización de sistemas democráticos de gobiernos que auguran una época con un gran potencial de ejercicio de la libertad para todos los pueblos americanos.

América Latina debe, sin embargo, asumir desafíos que posibiliten afianzar tales cambios, tanto porque sus modelos de crecimiento deben ser globalizadores, sostenidos y sustentables como, porque la democracia pueda consolidarse como forma de gobierno y convivencia.

Para alcanzar estos logros requiere de políticas económicas y sociales que enfrenten la pobreza y alienten al desarrollo humano.

La mayoría de los países de Latinoamérica –Argentina en particular-, han venido escindiendo la política de la economía y ésta, de la lucha por una mayor igualdad. No es casual entonces, que sea la región más desigual del planeta.

La dificultad para relacionar los comportamientos políticos y acciones económicas con las condiciones de exclusión y pobreza derivó en la desvinculación de los compromisos

del Estado con políticas públicas que tendieran a articular, con más énfasis, la calidad de las democracias, el crecimiento económico y la justicia social.

POLITICAS SOCIALES. Su historia en la región y en nuestro país

“Las políticas sociales constituyen formas de intervención del Estado en la denominada cuestión social (...) responden a la concepción ideológica de los grupos dominantes, que en un determinado momento histórico detentan el poder del Estado”. (Martínez, S. y Agüero, J. 2008: 129).

La formulación y la coordinación de las políticas sociales confrontan agudos problemas. A los de tipo estructural, se han sumado los provocados por la crisis y las políticas de ajustes.

La crisis clausuró un largo periodo de crecimiento económico que se inició, para la mayoría de los países de América Latina, con posterioridad a 1929 y que se aceleró en la segunda postguerra. Estos avances económicos se tradujeron en un desarrollo social también notable. Baste comparar los principales indicadores sociales de comienzo de los años cincuenta con los actuales. Esos avances, empero, se dieron de manera parcial, discontinua, segmentada y, generaron también, profundas desigualdades, aún cuando contribuyeron a elevar los niveles de vida del conjunto de la población latinoamericana.

La inequidad y la segmentación social han estado presentes en el desarrollo de la región. Además, las responsabilidades de la política social, han estado centradas en el Estado, quien ha ejercido las funciones de diseño, financiación, recaudación, compra, provisión y supervisión, sin una diferenciación de las funciones, generalmente ejercidas por el mismo organismo, lo cual ha sido un obstáculo para el control de la eficiencia. Según Wacquant “...Los Estados son grandes productores y modeladores de desigualdad y marginalidad...” (Wacquant, L. 2001:176).

Por lo que, “la cuestión social no es el resultado de fuerzas naturales incontrolables sino de estrategias políticas identificables” (Lo Vuolo 2001: 102).

En la década del 80, todos los países de la región sufrieron un fuerte retroceso de su crecimiento económico, Argentina se encuentra entre los más afectados. Esta caída fue el resultado de serios problemas estructurales que enfrentó la economía del país, agravado por los planes de estabilización y ajuste implementados para el pago de la deuda.

Una de las medidas adoptadas para reducir el abultado déficit fiscal fue reducir significativamente el gasto público, afectando en particular el gasto social. Esta disminución del gasto se realizó en forma indiscriminada, sin priorizar sectores, programas, áreas geográficas ni grupos sociales. Es decir, sin tomar en cuenta los efectos sociales de tal decisión.

En primer lugar, fueron afectados los fondos orientados a la inversión en infraestructura y en equipo, tanto la requerida para atender el crecimiento demográfico o la extensión de la cobertura como también se eliminó o se redujo la destinada a reposición por obsolescencia. Luego, se vio resentido el gasto para el mantenimiento de la infraestructura y los equipos; posteriormente, se redujeron los recursos destinados a la adquisición de insumos. Así, muchos hospitales, por ejemplo, se vieron privados de medicamentos, placas radiográficas, etc.

El resultado de todas las medidas implementadas fue un claro deterioro en la calidad de la oferta de los servicios. No existió reposición del stock de capital; una parte significativa del equipamiento dejó de funcionar; los insumos básicos debieron ser provistos por la población en algunos casos; y en otros, no se cumplían con las normas básicas de calidad de prestación. Finalmente, la caída de los salarios y la reducción de los planteles, provocó una merma de la oferta.

Tal deterioro se producía simultáneamente con un empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Se presentaba la más dramática de las situaciones, cuando más se requería de mallas de protección social por el crecimiento explosivo de

necesidades básicas insatisfechas, la red existente se debilitaba, se desmantelaba o se deshacía.

Las políticas sociales se mostraban ineficaces para eliminar las inequidades, la crisis la agudizó aún más, provocando un fuerte deterioro en la imagen que la población tenía de los servicios públicos.

Al deterioro de los servicios sociales se sumó un agravamiento de la situación social, consecuencia de un aumento en la incidencia de pobreza.

A los pobres históricos, aquellos que no llegaron a beneficiarse en las décadas anteriores de los beneficios del desarrollo, se agregaron, un nuevo segmento, el de los pauperizados o pobres recientes. En el caso de la salud por ejemplo, muchos perdieron su cobertura de seguridad social. ¿Dónde acudieron entonces en busca de atención? A los servicios públicos, algunos de los cuales llegaron a saturarse afectando aún más, el deterioro en la calidad de la atención.

De esta manera se presentó, la peor de las ecuaciones. Se redujo el financiamiento de los servicios sociales pertenecientes al sector público y paralelamente creció el número de demandantes.

En la mayor parte de los casos se observó que el ajuste fue en detrimento de éstos, quienes se vieron desplazados de la atención de los servicios hospitalarios por parte de los nuevos pobres. Por otro lado, los pobres estructurales espaciaron sus controles de salud, por ejemplo, y resolvieron acudir a los servicios cuando los cuadros de enfermedad ya eran agudos.

La exclusión resultante, se presentó asociada a la pérdida de beneficios provistos por el sistema de políticas sociales, acrecentando la desigualdad y la marginación derivadas de la distribución acumulativa.

Lo anterior, nos estaría indicando que la política social se constituyó de acuerdo a un modelo de ciudadanía asistida, desde los supuestos que la desigualdad social es algo natural por un lado; y por otro, las políticas redistributivas no se basaron en derechos sociales, por el contrario, fueron de tipo discrecional. (Bustelo, E. 2000).

Por lo que, la situación social actual adquiere ciertas particularidades que nos permiten conceptualizar la pobreza a partir de ciertos componentes, a saber:

- En primer lugar, la pobreza se presenta así, como un proceso masivo de exclusión de importantes sectores de la población por fuera del sistema socioeconómico vigente. Proceso que resulta de la combinación fundamental de dos órdenes de factores: precarización de las relaciones de trabajo y fragilidad de los soportes relacionales -familiares, barriales, comunitarios-, lo que describe situaciones de vulnerabilidad creciente. (Castel, R. 1991)
- En segundo lugar, se trata de un problema de orden estructural y no transitorio, de allí que las respuestas para enfrentarlo constituyan un verdadero desafío.
- En tercer lugar, es un fenómeno que atraviesa horizontal y transversalmente a la sociedad, ofreciendo una gama diversa de situaciones entre diferentes sectores y aún dentro del mismo sector.

Por su parte Barbeito y Lo Vuolo consideran que “...La pobreza es un fenómeno que se autoreproduce, por una complejidad de factores que incluye la ocupación, la vivienda, el nivel educativo, el origen socioeconómico, el medio ambiente familiar y geográfico”. (Barbeito, A y Lo Vuolo, R. 1992:139 -142). Pero, enigmáticamente, en el caso particular de nuestro país, “se inscribe en procesos de crecimiento y prosperidad económica. Coexisten *“la opulencia y la indigencia, el lujo y la penuria, la abundancia y la miseria”*, como consecuencia de una doble transformación de la esfera del trabajo: la eliminación de puestos de trabajo y la degradación de las condiciones básicas de empleo, remuneración y seguridad social” (Martínez, S. y Agüero, J. 2008: 141).

En este sentido, se señala su composición heterogénea que supera las formas tradicionales de pobreza, -la llamada estructural-, y dentro de esas situaciones de exclusión demanda identificar realidades y dinámicas diferentes.

Según Castel es preciso focalizarse la dupla “marginado-integrado”. (Castel, R. 1991). El punto de partida es la interpretación de la forma de subsistencia de aquellos individuos que se encuentran marginados del sistema social. El eje de reflexión lo constituye la idea de integración en base a dos órdenes:

- En relación al trabajo.
- En relación a la inserción relacional.

Estos dos factores nos reenvían a dos dimensiones que operan de manera combinada en la concepción de integración social: la material y la simbólica.

Así, la integración material se vincula a la posibilidad de acceder a los bienes y servicios de consumo socialmente disponibles (inserción ocupacional) y la integración simbólica a la posibilidad de participar y compartir en el proceso de gestación y asimilación de valores sociales (inserción relacional).

El autor clasifica de este modo:

- Zona de integración: caracterizada por el trabajo estable y una fuerte inscripción relacional.
- Zona de vulnerabilidad: caracterizada por precariedad y fragilidad relacional.
- Zona de desafiliación: donde predomina un doble desenganche del trabajo que se expresa en situaciones de extrema desocupación y que en las redes sociales se traduce en aislamiento relacional.

Por último, el cuadro crítico se completa al hacerse evidente que la política social se ha preocupado poco por diagnosticar los problemas y, mucho menos, monitorear su desempeño y evaluar el cumplimiento de sus metas y objetivos en función de aplicar medidas correctivas.

De la mano de esto, es conocido que el sistema de información oficial encargado de monitorear las condiciones de vida, la situación socio-económica de los hogares y el

desempeño del mercado laboral presenta deficiencias, discontinuidades y, más recientemente, alteraciones a sus debidas funciones institucionales.

Podríamos decir que existe o persiste “una deuda social”.

LA DEUDA SOCIAL

La lógica del mercado implementada por el capitalismo no crea ni distribuye riqueza, mucho menos promueve empleo.

Por otro lado, transforma el trabajo en mercancía. Lo anterior, implicó un largo y doloroso proceso de disciplinamiento social, ya que separó al hombre de lo producido con su trabajo y de los elementos de producción, generando cambios profundos en las relaciones sociales de producción. (Martínez, S y Agüero, J. 2008: 80).

De tal modo que, el trabajo que confería identidad y a la vez de ser eje organizador de la vida cotidiana de los sujetos, hoy está ausente en un alto porcentaje de la población.

Es un tiempo difícil y deshumanizante. El hombre ha dejado de ser el centro porque no es la mano de obra necesaria por lo que no es necesario cuidarlo. (Rivello, B. 2001)

Sin duda, la situación social que hoy atraviesa nuestro país debe ser contextualizada en una historia signada de confrontaciones políticas y de decadencia institucional, así como por la ausencia de un proyecto consensuado.

Estas condiciones explican la profunda degradación que experimentaron las capacidades de progreso económico y social, cuyas consecuencias más evidentes se hicieron visibles en el aumento del desempleo, la pobreza, la corrupción, la crisis de los partidos políticos, la pérdida de la autoridad moral del Estado y las profundas desigualdades regionales y sociales que caracterizan al país.

En su conjunto, estos aspectos expresan la existencia de una abultada “deuda social”, cuya existencia se hizo y se hace sentir a través de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Aunque las causas de la pobreza son múltiples, interdependientes y complejas, la respuesta al problema debe contemplar, necesariamente, la eliminación de la brecha existente entre los ingresos monetarios que la gente percibe por su participación en los mercados y lo que realmente necesita para cubrir estándares aceptables de consumo. En esta perspectiva se inscriben las denominadas “políticas redistributivas”, cuyo propósito es, precisamente, corregir –atenuar o compensar- los desequilibrios producidos en el reparto de la riqueza. (Barbeito, A y Lo Vuolo, R. 1992)

TRABAJO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA

Según Calvez, desde un punto de vista filosófico y social el trabajo no es sólo un medio de producción material de satisfactores, es también –y fundamentalmente– un modo de acción social cuya naturaleza compromete tanto a la realización existencial de los individuos como a la construcción material y simbólica de la sociedad. Los sujetos reproducen así su existencia en el plano material y en el existencial (Calvez, J y Botana, N. 2004).

Desde esta concepción *trabajo* es una actividad específicamente humana. El hombre domina y transforma la naturaleza para ponerla al servicio de las necesidades humanas (Arendt, H. 1997), posibilitando al mismo tiempo un ámbito de integración a la vida social.

El trabajo es más que el trabajo, es el integrador social; por lo que, el no-trabajo es más que desempleo. (Castel, R. 1997: 23).

De esta manera, el hombre a partir de su trabajo podrá actualizar capacidades humanas, motivar proyectos, participar en un espacio de construcción de relaciones sociales, crear fuentes de identidad y de afiliación social.

Será posible no sólo mediante la inserción en el mercado de trabajo a través de un empleo, también es necesario que el hombre encuentre la posibilidad de desarrollar su vida social en condiciones de autonomía, entendida como la capacidad de los sujetos de

formular objetivos y estrategias consistentes con sus intereses y deseos y de tomar las decisiones necesarias para concretarlos (Doyal, L. y Gough, I. 1994).

Lo anterior, lo podremos pensar solo cuando exista posibilidad real de inserción en la reproducción social de la vida ya que no radica sólo en las expectativas o capacidades de las personas, sino también, en la existencia de barreras institucionales que dificultan la participación de los grupos sociales más vulnerables.

Es decir, que se asocia a un conjunto de factores localizados en el nivel de las estructuras de oportunidades en un espacio social estructuralmente asimétrico, donde las transformaciones tanto económicas, sociales y políticas que se han producido en la región y en nuestro país en particular, profundizan aún mas esa asimetría lo cual, opera negativamente sobre los sectores olvidados, excluidos, estigmatizados.

Las alteraciones producidas en el mercado de trabajo (desocupación, subocupación, precarización) inciden directamente en la trama social, tanto en la más próxima como es la familia, como en la más amplia comunidad-vecindad, creando alteraciones en lo que Bourdieu denomina el capital social, vale decir, redes sociales, familiares o de amistad que en función de las diferentes trayectorias se construyen a lo largo de la vida.

Este capital es el que sufre signos importantes de debilitamiento, que se manifiesta con mayor evidencia en los casos de pobreza estructural. El grado de integración social depende en gran medida de la inscripción relacional, así se presenta en los sectores más carenciados un eslabonamiento de situaciones frágiles: riesgo de desocupación, dependencia económica, aislamiento relacional. (Castel, R. 1991)

Junto al capital social existe también un capital cultural que, a manera de recurso, se va acumulando con diferentes ritmos e intensidades, en función del origen social, nivel educacional, experiencias de vida, roles desempeñados en distintos ámbitos; y que se expresa en la forma de percibir el mundo que cada uno adquiere y de representarse un lugar propio en ese espacio. Las actitudes, reflexiones, se nutren de ese capital cultural que ofrecerá variaciones en función del sector social de que se trate.

El reconocimiento de un modo de vida singular, vinculado a situaciones de pobreza, se pone de relieve en la articulación con la dinámica social general. En este sentido, se pueden encontrar expresiones de esta realidad como son:

- Falta de participación e integración de los sectores pobres a las instituciones principales de la sociedad, lo que se puede explicar a partir de la ausencia de *integración simbólica*. No obstante se puede diferenciar, atendiendo a la heterogeneidad de la pobreza, situaciones disímiles, con algunos niveles de compromiso institucional aunque sean tenues.
- Condiciones habitacionales precarias -hacinamiento, carencia de servicios e infraestructura-.
- Bajo nivel de organización social.
- En relación a la estructura familiar: inexistencia de la infancia como una etapa especialmente prolongada y protegida del ciclo vital, iniciación sexual temprana, centralización de la familia en torno a la figura de la mujer o madre, falta de intimidad, etc.
- En relación a los individuos, sentimientos de: impotencia, dependencia, inseguridad, inferioridad, marginalidad, etc.

Lo anterior deriva en condiciones de *mínima o nula autonomía económica* por parte de los hombres que dificulta el logro de una adecuada inserción en la vida social, un factor de superación de condiciones de vida indignas, no sólo para la persona, sino para todo el grupo familiar al que pertenece.

EL POR QUE DE LAS PÓLITICAS SOCIALES

Las políticas sociales reconocen su razón de ser en corregir las inequidades que se generan en la esfera de la producción y la distribución primaria, atendiendo las necesidades

insatisfechas de los diferentes grupos sociales, mediante los recursos obtenidos por el Estado a través de la percepción de impuestos al consumo, a los ingresos y a la riqueza.

La mayor parte de los fondos obtenidos provendrían de los grupos con más recursos y los asignarían al financiamiento de acciones y servicios de los que se beneficiarían aquellos con necesidades insatisfechas. Es decir, se trataría, de un proceso de transferencias netas de los ricos a los pobres, ejecutado y mediado por el Estado.

Actualmente, el desafío social que enfrenta la región exige no sólo disminuir o eliminar las desigualdades que subsisten de la etapa anterior, sino también evitar un proceso de regresión social, que es una amenaza latente para muchos países, entre ellos Argentina.

Frente a los desafíos del futuro en materia de derechos y desarrollo humano, es preciso concebir la política social en forma más integrada, de modo que conjugue universalidad, solidaridad y eficiencia acorde a las exigencias y posibilidades de desarrollo económico - social de cada región teniendo en cuenta principios de, sustentabilidad, integralidad y fortalecimiento de la comunidad.

Por lo anterior, la política social debería reunir y expresar el conjunto de objetivos, normas y sistemas por medio de los cuáles la sociedad se compromete a garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de las personas.

La política social entendida de esta manera es la expresión fundamental de los propósitos de la sociedad y de las posibilidades económicas para alcanzarlos.

El modelo de crecimiento de América Latina, y en particular de Argentina, debe ser uno que desde su propio diseño integre el desarrollo social, pues tiene en su población su principal capital.

Las inversiones en salud, nutrición, educación, agua y saneamiento, son fundamentales para asegurar la presencia de recursos capaz de enfrentar este desafío. Por lo tanto, se propugna la necesidad de diseñar y llevar a cabo un modelo económico - social que, asegurando el crecimiento, éste sea sostenido, sustentable y generador de mayor equidad.

Un compromiso para construir sociedades democráticas más igualitarias implica no solamente tender puentes hacia una mayor integración, sino también, que la política no sea solamente administradora del poder del mercado y de los condicionamientos del orden global. La política debe expresar la voluntad de redefinir en acciones concretas el significado de la ciudadanía, en términos de derechos, de la profundización de la democracia y de mayores niveles de equidad e igualdad social.

CONCLUSIÓN

Este fin de milenio, un nuevo orden mundial introduce modificaciones en la vida cotidiana de los sujetos sociales.

Ana Quiroga sostiene que, “En el mundo de la llamada globalización, el principal problema de salud es la pobreza y la exclusión del sistema productivo de amplios sectores de la sociedad con su efecto negativo cual es, *carencia de perspectivas y proyectos*. Es en la cotidianeidad, en el ritmo, en el tiempo, en el espacio, en donde se van desplegando las experiencias de las relaciones sociales y los vínculos; y es allí donde se advierte una creciente fragmentación social (...) Hay diferentes discursos y diferentes atribuciones de sentido desde distintos emisores. El discurso de la globalización tiende a la homogeneización de su modelo económico, pero en realidad enmascara la fragmentación, encubre la competitividad y la rivalidad interna. (...) El modelo social imperante incentiva todos los aspectos de rivalidad y competencia, es decir, convierte en aquellos que debería ser articulables y solidarios en contrarios y rivales. Cuando desde un orden social se incrementan las condiciones objetivas para la carencia y se instala la amenaza de exclusión, se deteriora el tejido social” (Quiroga, A. 2001).

Pero las crisis no implican sólo vacío y fragilización, son también, en tanto ruptura de lo cotidiano, posibilidad de nuevas formas de conciencia y de interpelación de la realidad.

Como bien lo señala Lo Vuolo: "La historia demuestra que, en gran medida, los paradigmas económicos responden tanto a su consistencia teórica como al clima político prevaleciente en un determinado momento. En alguna medida, son algo así como variaciones u homologaciones de lo que ya se ha instalado en la conciencia colectiva por otros medios".

A diferencia de otros momentos históricos, el actual, tiene que enfrentar las amenazas de la globalización, es decir, las incertidumbres de un nuevo desorden mundial, que parece marchar en el sentido opuesto al ideal de mayor libertad, solidaridad, justicia e igualdad. Lo anterior requiere cambios políticos y culturales profundos que minimicen los riesgos y permitan aprovechar las oportunidades.

BIBLIOGRAFÍA

- ARGUMENTO, A, (1996) *"Los silencios y las voces en América Latina". Notas sobre el pensamiento nacional y popular*". Editorial Colihue. Bs. As.
- ARENDT, Hannah (1997) *¿Qué es la política?* Paidós. Barcelona.
- BARBEITO, A (1999) *"La integración de los sistemas de transferencias fiscales como instrumento de integración social"* En: "Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano". Lo Vuolo y otros. Ciepp.
- BUSTELO, Eduardo (2000) *"De otra manera. Ensayo sobre política social y equidad"*. Homo Sapiens. Bs. As.
- BUSTELO E. Y MINUJIN A. (1991): *"La Política Social en los tiempos del cólera"*. Documento de trabajo N° 7. UNICEF Argentina.
- CASTEL, Robert (1997) *"La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del asalariado"*. Paidós. Bs. As.
- CASTEL, Robert, (1991), *"Los Desafiliados. Precariedad del trabajo y vulnerabilidad social"*, Topia, Año I, N° III. Bs. As.
- CALVEZ, J. y BOTANA, N (2004): *"El horizonte del nuevo siglo: reflexiones sobre la justicia y la paz en el mundo"*. Editorial Sudamericana. Bs. As.

- CEPAL *Equidad, Desarrollo y Ciudadanía*. (2000), Versión definitiva Naciones Unidas. Parte II. Política Social Universal, Solidaria y Eficiente. Capítulo 3 Principios de la Política Social y lucha contra la pobreza.
- CEPAL. (1.990): “*Transformación Productiva con Equidad. La tarea prioritaria del desarrollo en América Latina y el Caribe en los años 90*”. Santiago. Chile.
- DOYAL, L. y GOUGH, I (1994) “*Teoría de las necesidades humanas*”. Icaria. Barcelona.
- FORRESTER, Viviane (1997): “*El horror económico*”. Fondo de Cultura Económica. Título original “*L’horreur économique*”. Traducción Daniel Zadunasky. 4ta. Reimpresión. Bs. As.
- HELLER, Agnes. (1985): “*Historia y vida cotidiana*”. Ed. Grijalbo. México.
- LECHNER, Norbet. (1.990): “*Los patios interiores de la democracia*”. Fondo de Cultura Económica. Chile.
- LO VUOLO, Rubén M. (1.991): “*Economía Política del Estado de Bienestar: mitología neoliberal y keynesianismo populista*. En: “El Estado Benefactor: un paradigma en crisis”. Ed. Miño y Dávila.
- LO VUOLO, Rubén (2001) “*Alternativas. La economía como cuestión social*. Altamira. Bs. As.
- MAX NEEF, MANFRED, E.(1.993): Cuestiones de exclusión social y política. En desigualdad y exclusión. UNICEF-LOSADA
- MARTÍNEZ, S y AGÜERO, J. (2008) *¿Cuestión Social o Político-Ideológica?* Cap. 4. En: “La Dimensión Político – Ideológica del Trabajo Social. Claves para un trabajo social emancipador”. Martínez, S. y Agüero, J. Editorial Dunken. Bs. As
- QUIROGA, Ana. (2.001). “*El sujeto y la desinserción laboral en un mundo globalizado*”. En: XIX Jornadas Nacionales de Trabajo Social. Mercosur e Impacto Social en Latinoamérica. Espacio Editorial. Mar del Plata. Buenos Aires.

10i

CONGRESO
NACIONAL
DE ESTUDIOS
DEL TRABAJO

PENSAR UN MEJOR TRABAJO.
ACUERDOS, CONTROVERSIAS Y PROPUESTAS.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS DEL TRABAJO

- RIVELLO, Beatriz. (2.001). *“Cómo sobreviven los nuevos pobres”*. Ponencia XIX Jornadas Nacionales de Trabajo Social. Mercosur e Impacto Social en Latinoamérica. Mar del Plata. Buenos Aires.
- WACQUANT, Luiz (2001) *“Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio”*. Manantial. Bs. As.